

Santiago, quince de julio de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En esta causa RUC N° 2200844952-3 y RIT N° 571-2023 del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Antofagasta, en sentencia de once de marzo de dos mil veinticuatro, se condenó a Joaquín Ignacio Poblete Araneda a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de dos delitos consumados de receptación de vehículos, previstos y sancionados en el artículo 456 bis A inciso tercero y quinto del Código Penal, perpetrado en Antofagasta, el 29 de agosto de 2022.

La pena impuesta deberá cumplirse de manera efectiva.

Contra esta sentencia la defensa del acusado interpuso recurso de nulidad, el que se estimó admisible por este tribunal y que se conoció en la audiencia pública de veintiséis de junio pasado, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

**Considerando:**

1º) Que el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado Joaquín Ignacio Poblete Araneda esgrime como causal principal la establecida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, fundado en que el funcionario policial señaló en el juicio que contaba con autorización otorgada por el dueño del predio para ingresar al taller mecánico, donde se encontraba el acusado. Sin embargo, el testigo reservado declaró que tenía arrendado el taller mecánico y que estaba cerrado por completo con un material ligero, ingresando los funcionarios policiales por un portón aledaño de la casa de una



vecina, para luego ingresar al taller por la parte posterior, donde la pandereta era más baja.

Precisa que esas declaraciones llevan a concluir que los funcionarios policiales se extralimitaron en sus facultades, pues no tenían autorización del legítimo ocupante del taller mecánico, ni tampoco solicitaron la autorización correspondiente al Ministerio Público o al tribunal competente.

Concluye que con las actuaciones de los funcionarios policiales se generó la afectación o perturbación de los derechos fundamentales a la privacidad e inviolabilidad del hogar, reconocidos en los números 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando se acoja la causal principal que invoca el recurso de nulidad, se anule la sentencia y el juicio, disponiendo que se efectúe un nuevo juicio oral, por un tribunal no inhabilitado.

En subsidio, invoca la causal contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal.

Expresa que se vulneró el principio de razón suficiente al establecer la calidad de autor del imputado de los delitos por los cuales fue condenado, toda vez que la declaración realizada por el único funcionario policial que laprestó en el juicio oral es insuficiente para superar la presunción de inocencia que le asiste al acusado, no reparando el tribunal en que existía un coimputado que no compareció a la audiencia.

Por otro lado, los sentenciadores omiten valorar la declaración íntegra del testigo de iniciales GGCR, referente a que el taller estaba separado del sitio que habitaba y que una vecina es la persona que le avisa que están los funcionarios de Carabineros, los que le informan que están buscando un auto



robado, circunstancias que darían cuenta que las condiciones de ingreso al taller no fueron las que señalaba el funcionario policial.

Añade que el mencionado testigo manifestó que la puerta del taller es distinta a la puerta de su propiedad, lo que el tribunal omite mencionar en la sentencia, así como la circunstancia que Carabineros ingresó al lugar por el portón de una vecina.

En cuanto a las consideraciones que efectúa el tribunal para efectos de determinar la cuantía de la pena, la recurrente estima que existe una insuficiencia de fundamentos.

Por lo anterior, pide se acoja y anule tanto la sentencia impugnada como el juicio oral, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio oral, por el tribunal no inhabilitado que corresponda;

2º) Que, de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, para acreditar las circunstancias constitutivas de la causal principal esgrimida por el recurso de nulidad, la defensa incorporó como prueba los pasajes de los registros de audio de las declaraciones prestadas por testigos en el juicio oral;

3º) Que los hechos que la sentencia impugnada tuvo por acreditados en el motivo sexto son los siguientes:

*“El 29 de agosto de 2022 en horas de la tarde, al interior de un terreno ubicado en calle Limonita 10850 de Antofagasta, Carabineros sorprendió al acusado Joaquín Poblete Araneda, en poder de la camioneta marca Ford, modelo F150 que portaba la patente PFYB.82, verificando con el número de chasis y motor que le correspondía la patente LBXK.99-6, de propiedad de la víctima D.A.C.G., camioneta que mantenía encargo vigente por el delito de robo, según parte de denuncia N° 4679 de la 19° Comisaría de Providencia del 27 de agosto de 2022.*



*Además, junto a ese vehículo, estaba un station wagon marca Nissan, modelo qashqai, color rojo, el cual no mantenía sus placas patentes, y conforme al número de chasis y motor, le correspondía la patente PKYH.57-2, de propiedad de la víctima Z.H.F.Z. que había denunciado que le fue sustraído, según parte policial N° 65 de la 52° Subcomisaria Maipú Oriente el 18 de noviembre de 2021, motivo por el cual, teniendo presente que no podía menos que conocer el origen ilícito de ambos vehículos, la policía procedió a su detención.” (sic).*

Estos hechos fueron calificados como dos delitos consumados de receptación, sancionado en el artículo 456 bis A, incisos tercero y quinto del Código Penal;

4°) Que, en cuanto a la causal principal impetrada, prevista en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, se advierte que el recurso denuncia la configuración de la hipótesis de nulidad en el agravio a la garantía constitucional del debido proceso, fundado en que los funcionarios policiales ingresaron a un taller mecánico sin contar con una autorización de la persona que estaba encargada del inmueble, atendido que el dueño del terreno, donde se emplazaba el taller, lo había arrendado a una persona llamada Rodrigo Arellano, quien detentaba por tanto el uso de la propiedad, como tampoco contaban con una autorización otorgada por el juez de garantía, encontrando en su interior dos vehículos que tenían encargo por robo, lugar donde también estaba el acusado;

5°) Que, de lo expuesto, se establece que los reclamos descansan únicamente en infracciones que la defensa observa respecto de las actuaciones que habrían afectado el derecho a la inviolabilidad de la privacidad y del hogar respecto de terceros, esto es, de una persona identificada como



Rodrigo Arrellano, quien arrendaba el taller mecánico donde se encontraba el imputado y los dos vehículos que mantenían encargo por robo, quien no compareció al juicio y, por consiguiente, no ha formulado reclamo alguno, por lo que este tribunal no logra visualizar su concreta y determinante repercusión en los derechos del enjuiciado.

Así, por lo demás, lo ha resuelto esta misma Corte en los autos Rol N° 14.639-2015, por sentencia de fecha 4 de noviembre de 2015.

El recurso de nulidad, como todo medio de impugnación de resoluciones judiciales, exige la existencia de agravio, esto es, un perjuicio reparable en este caso sólo con la declaración de nulidad, el agravio cuya concurrencia exige el recurso de nulidad necesariamente tiene que afectar de manera directa al recurrente, en la especie, vulnerando las garantías constitucionales que alude. Dicho lo anterior, no es posible establecer como vulnerados los derechos del acusado, cuando quien tiene la titularidad de ellos y podría alegar su perturbación es un tercero, que no comparece en juicio, ni alega su infracción;

**6°)** Que, así las cosas, al no haberse demostrado una infracción sustancial a una garantía fundamental del acusado, la causal en análisis no podrá prosperar;

**7°)** Que en lo que concierne a la causal subsidiaria enarbolada por la defensa del acusado, esto es, de haberse vulnerado los límites de la sana crítica, como también haberse quebrantado los principios de la razón suficiente y de no contradicción respecto a los delitos de receptación y la calidad de autor que se le atribuye al encartado, basta decir que el artículo 297 del Código Procesal Penal ha dispuesto cómo deben darse por acreditados los hechos, entregando el legislador al tribunal de instancia la valoración con plena libertad, siendo su única limitación que no contradigan los principios de la lógica, las



máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, por lo que pueden razonar apoyados en la prueba rendida y dando justificación en uno u otro sentido.

Constando que los medios de prueba rendidos en el juicio oral fueron no sólo reproducidos sino sopesados al tenor de las alegaciones de los intervinientes y explicitando los juzgadores en sus razonamientos décimo y undécimo, por qué les asignan mayor valor a determinadas pruebas que a otras, así como las que descartan, como también señalan en el motivo décimo tercero los fundamentos para determinar el quantum de la pena, nada parece avalar alguna crítica de importancia al respecto en lo referente a los delitos de receptación y la forma en que se estableció la pena.

En rigor, del tenor del recurso se desprende claramente que lo que se intenta impugnar es la valoración que hizo el tribunal sobre cuya base fijó los hechos y las razones que llevaron a desestimar las propuestas de la defensa respecto de los delitos de receptación, como también sus alegaciones referentes a la forma de determinar la pena. De esta forma, lo que destaca en el libelo respectivo son presuntas insuficiencias o contradicciones, o apreciaciones distintas acerca de la gravitación de determinados medios de prueba, que surgirían de un análisis individual de las probanzas respecto de los dos delitos mencionados y una diferencia respecto de la sanción establecida. Pero esas protestas sobre la apreciación de las pruebas, reservada a los jueces, son más propias de un recurso de apelación y carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad como la intentada.

Cabe tener presente, asimismo, que la impugnación de la sentencia fundada en esta causal no dice relación con las conclusiones a que han arribado los sentenciadores al apreciar la prueba producida en el juicio oral



respecto de los delitos de receptación, del momento que en ese aspecto gozan de libertad; con la limitación de que al valorarla no se aparten de los principios, máximas y conocimientos ya indicados, a fin de fundamentar debidamente el fallo para así controlar su razonabilidad. Sigue de ello que lo que sí es revisable por este medio de impugnación es la estructura racional del juicio o discurso valorativo sobre la prueba, desde la perspectiva antes enunciada. En otras palabras, sólo es posible estimar el recurso por esta causal si el tribunal *a quo* determina su convicción sobre la base criterios manifiestamente arbitrarios o aberrantes, lo que no acontece en la especie.

Por todo lo dicho, este acápite del recurso en referencia será denegado.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 373 letra a), 374 letra e) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto a favor del sentenciado Joaquín Ignacio Poblete Araneda, en contra de la sentencia de once de marzo de dos mil veinticuatro, dictada en los antecedentes Ruc N° 2200844952-3 y Rit N° 571-2023 y el juicio oral que le antecedió del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, los que en consecuencia, no son nulos.

**Se previene que las Ministras señoras Letelier y Gajardo** concurren a la decisión de rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado en lo que dice relación con la causal principal, teniendo también presente que resulta evidente que las situaciones denunciadas en el libelo son de aquellas respecto de las cuales el recurrente debió y pudo oportunamente impugnar, ya sea incidentando la legalidad de la detención o haber pedido la exclusión de prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, cuestión que el recurrente no acreditó, así las cosas, el recurso interpuesto no contiene la preparación que exige la ley, en razón que sólo se reclamó de los vicios del



procedimiento en la audiencia de juicio oral, no obstante que los mismos tuvieron su génesis al inicio de la investigación.

Sobre la materia esta Corte ha sostenido que *“falta a la causal de competencia de esta Corte, la preparación que exige la ley, porque se reclama de supuestas omisiones verificadas antes de la audiencia de juicio, pero no se señala ni se ofrece justificar cómo se reclamó oportunamente de ese vicio, en cada una de las etapas pertinentes, sin que baste para dar por acreditado el requisito que se haya alegado en los alegatos de apertura o clausura de la audiencia de juicio”* (SCS Rol N° 92.882-2016 de 6 de diciembre de 2016 y Rol N° 65.317-2016 de 26 de septiembre de 2016).

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

**Rol N° 11.647-2024.**

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y los Abogados Integrantes Sr. Raúl Patricio Fuentes M. y Sr. Carlos Urquieta S. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal. Santiago, 15 de julio de 2025.







En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

